

PRIMERA COMISION DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADOS INTEGRANTES:

CARLOS GALINDO MEZA

ALFREDO ORTEGA LOPEZ

JESÚS MARIELA BARRERAS ALCORCHA

LUIS GERARDO SERRATO CASTELL

CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH

JESÚS BUSTAMANTE MACHADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A los diputados integrantes de la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, previo acuerdo de la Presidencia, nos fue turnado para estudio y dictamen, escrito del Gobernador del Estado, refrendado por el Secretario de Gobierno, mediante el cual presenta a esta Soberanía iniciativa de **Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y de Firma Electrónica para el Estado de Sonora**, la cual tiene como objetivo institucionalizar y generar un proceso integral del uso de la firma electrónica en los actos y trámites que se llevan a cabo en nuestro Estado con motivo de los diversos servicios públicos que se prestan a los particulares, dada las nuevas tecnologías aplicadas en la eficiencia del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y correlativos del Decreto que Reglamenta el Funcionamiento y Gobierno Interior del mismo poder, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo del Estado expresa los siguientes argumentos para motivar su viabilidad:

“En la actualidad, el intercambio electrónico de información tiene cada vez mayor importancia en las comunicaciones debido a que en las últimas décadas la evolución de las tecnologías de comunicación han modificado y fomentado nuevas formas de trabajo, comunicación y aprendizaje, incidiendo estos factores en todos los ámbitos del quehacer humano, particularmente en la gestión pública.

Para responder tanto a las demandas de sus ciudadanos y al cambio de sus ambientes globales, los gobiernos han tenido que adoptar las condiciones de apertura, participación, adaptación tecnológica y transparencia, dando lugar así al denominado gobierno electrónico, el cual se define como la utilización por el sector público de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar información gubernamental y prestar servicios públicos a los ciudadanos mediante el uso de medios electrónicos.

Un gobierno electrónico o de prestación de servicios en línea, ayuda a crear seguridad y confianza en la interrelación de gobierno y ciudadanos y propicia una gobernabilidad eficaz, toda vez que estas tecnologías eliminan la discrecionalidad al implementar un procedimiento rígido y transparente de la gestión pública de gobierno, facilitando el acceso de los ciudadanos a los trámites, servicios e información proporcionada por la administración pública. Además, el gobierno no sólo mejora su disponibilidad, sino

que también incrementa su calidad en los servicios al establecer canales de comunicación efectivos en sus operaciones.

Como respuesta a esta necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas, para brindar seguridad y fiabilidad a este tipo de comunicaciones, se ha implementado y desarrollado el uso de lo que se ha denominado firma electrónica, la cual constituye un instrumento que permite una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes abiertas de telecomunicación.

En tal contexto, sobre el uso de medios electrónicos, así como de tecnologías de la información y la comunicación, en los últimos años ya se ha regulado en el ámbito federal en diversas leyes tales como en el Código de Comercio, el Código Fiscal, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras. Asimismo, algunas entidades del país también ya cuentan con regulaciones en esta materia, tal es el caso de Guanajuato.

El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, establece como objetivo de este gobierno la construcción de un marco institucional sólido que garantice la vigencia plena del Estado de Derecho y la reinención de la función pública para acelerar la conformación de un gobierno electrónico y aprovechar de manera intensiva y con visión estratégica las tecnologías de la información, así como los adelantos en materia de comunicaciones para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población y facilitar la comunicación interinstitucional. Además, se plantea como firme propósito impulsar decididamente la prestación de servicios a través de medios electrónicos y promover la constitución y expansión de redes informáticas hacia el interior de las dependencias.

Sonora ha dado pasos en esta dirección mediante la tecnificación de sus medios operativos, creando de esta manera una infraestructura tecnológica en sus comunicaciones tanto al interior de la administración pública como con los ciudadanos, y para ello el Ejecutivo Estatal mantiene en operación un sitio oficial electrónico donde se localizan gran parte de los trámites y servicios en línea que ofrecen las diversas dependencias de la Administración Pública, pero aún quedan pendientes de adoptar otros instrumentos que redunden en mayores beneficios para la ciudadanía en general.

Con el fin de armonizar con la dinámica mundial y brindar un mejor servicio y gestión gubernamental a la ciudadanía, resulta necesario proveer un marco normativo que regule la figura del uso de la firma electrónica mediante la utilización de medios electrónicos para otorgar seguridad informática y jurídica en su utilización por parte de los usuarios de los servicios públicos y quienes realicen trámites antes las diversas instancias públicas estatales y municipales.

Uno de los beneficios inherentes a la implementación del uso de la firma electrónica es que se eliminan los documentos en soporte de papel que ocupan un significativo y costoso espacio, produciendo en consecuencia, una reducción en costos, así como el acceso a documentos a distancia, lo cual evita largos desplazamientos e información inmediata que se traduce en agilización de trámites, incrementando de esta forma el nivel en la prestación de servicios que ofrece la administración pública.

En ese sentido, se propone a ese H. Congreso del Estado para su discusión y aprobación, en su caso, la presente Iniciativa de Ley sobre el Uso de los Medios Electrónicos y de Firma Electrónica para el Estado de Sonora, cuyo propósito fundamental es institucionalizar y generar un proceso integral del uso de la firma electrónica en los actos y trámites que se llevan a cabo en nuestro Estado con motivo de los diversos servicios públicos que se prestan a los particulares.”

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- En el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal, el Gobernador del Estado es competente para iniciar, ante la Legislatura Local, las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la administración pública y progreso de la Entidad, así como promover e inducir en el Estado el progreso económico, social, político, cultural y, en general, el bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, fracción I y 79, fracción II y III, de la Constitución Política Local.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.

TERCERA.- Corresponde a esta Soberanía velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general, pudiendo concurrir con los demás poderes del Estado y gobiernos municipales, a la consecución de los fines y propósitos que redunden en beneficio de la colectividad, conforme a lo dispuesto por el artículo 64, fracción XXXV, de la Constitución Política Local.

CUARTA.- Para esta Comisión queda claro que la comunicación de información es esencial y básica en el desarrollo de una sociedad. Las repercusiones sociales, jurídicas y económicas son de tomarse en cuenta y plantean oportunidades y retos clave a personas, empresas y gobiernos.

Lo anterior, tiene su base en el hecho de que se debe dar seguridad en los intercambios de información en internet, herramienta que ayuda al Estado a eficientar sus programas y de la cual, en un mundo de tecnología, no podemos quedar ajenos. La privacidad, la integridad y la autenticidad de la información manejada debe ser tutela del derecho para garantizar la protección del Estado y los particulares contra terceros de la alteración de documentos de tal forma que no deja lugar a dudas de las partes y sus obligaciones y derechos.

Con la aprobación de la Ley en estudio no se deja en estado de indefensión al Estado o a los particulares debido a que, en la práctica, la firma es el lazo que une al firmante con el documento y las características tanto de la firma electrónica como la autógrafa son las mismas pues ambas coinciden en que son: identificativas, porque sirve para saber quien es el autor del documento; declarativas, esto significa que el autor del documento asume su contenido; y son probatorias porque permiten identificar si el autor de la firma es efectivamente aquél que ha sido identificado como tal en el acto de la propia firma, pero con la diferencia de que permite hacerlo en medios electrónicos con seguridad técnica y jurídica.

La firma electrónica avanzada (FEA) es un instrumento técnico y jurídico que nos permite manifestar nuestra voluntad a través de documentos electrónicos con la misma equivalencia que una firma autógrafa en el mundo del papel. Para que esto ocurra deben existir mecanismos que identifiquen claramente al usuario, es decir, que validen que es quien dice ser. Por eso, la firma electrónica avanzada se integra de dos componentes básicos: la identidad del que firma y la tecnología para validar esa identidad.

Para obtener un certificado digital deben cumplirse ciertos requisitos de acreditación que marque la dependencia correspondiente a la aplicación que se desea hacer. En el modelo tecnológico de la firma electrónica avanzada, la dependencia que emite los certificados digitales se denomina autoridad de certificación, mientras que la ventanilla u oficina que valida los documentos donde se acreditan los ciudadanos se le llama autoridad de registro. Una vez obtenido el certificado digital, el ciudadano o servidor público podrá identificarse ante las demás personas o instituciones a través de un sistema tecnológico, así como firmar electrónicamente, manifestar su voluntad y realizar múltiples trámites electrónicos.

Cabe mencionar que la tecnología existente detrás de los certificados digitales es suficientemente sólida pues está basada en estándares internacionales de interoperabilidad entre sistemas que permiten darle una adecuada confiabilidad a las operaciones que se realicen utilizando la firma electrónica.

La legislación sobre la firma electrónica es decisiva para regular operaciones que ya se están dando en la práctica pero que hasta ahora no adquieren la validez legal necesaria para considerarlo un instrumento eficaz.

En este orden, pretendemos se den los pasos necesarios para poner a nuestra Entidad en la vanguardia, lo que permitirá un trabajo más eficiente del Estado en sus diferentes órganos y niveles de gobierno e incentivará la inversión tan necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad, pues ofrece gran seguridad a los particulares respecto de los actos jurídicos que realicen y ahorrará costos innecesarios.

QUINTA.- La iniciativa en estudio se estructura y desarrolla en diez capítulos y cincuenta y tres artículos, los cuales estimamos necesario resumir en forma somera a efecto de resaltar los aspectos positivos de la misma.

En el Capítulo Primero se establece el objeto, que es regular, por una parte, la eficacia jurídica y aplicación del uso de los medios electrónicos y la firma electrónica avanzada en los actos, procedimientos administrativos y servicios que se lleven a cabo entre las dependencias, entidades, unidades administrativas o cualquier otro órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los ayuntamientos, así como entre éstos y los particulares y, por otra parte, la certificación de la firma electrónica avanzada y los servicios relacionados con la misma; contempla los sujetos a los que se aplicará la Ley cuando decidan hacer uso de la firma electrónica avanzada, ya sea para realizar trámites interinstitucionales o para poder acceder a los servicios prestados por las entidades públicas; se establecen las excepciones de aplicación de la norma y se estipula la posibilidad de que los entes públicos que estarán sujetos a la Ley se coordinen para definir los estándares, características y requerimientos tecnológicos que serán aplicables con el fin de que exista uniformidad y compatibilidad en el uso de los medios electrónicos y la firma electrónica para que los certificados correspondientes sean reconocidos y tengan validez.

En el Capítulo Segundo de la iniciativa se prevé que para la realización de los actos, trámites y servicios a que se refiere la Ley, tanto los entes públicos como los particulares, podrán hacer uso de los medios electrónicos utilizando mensajes de datos que contengan firma electrónica avanzada. Asimismo, se establece que la utilización de los mismos en ningún caso podrá implicar la existencia de restricciones de cualquier naturaleza en el acceso de los particulares a la prestación de servicios públicos estatales o municipales, los cuales podrán solicitarlos ya sea mediante el uso de los medios electrónicos, en los términos de la ley que se propone, o en la forma como tradicionalmente se ha venido haciendo, salvo que la ley específica que regula los trámites y servicios respectivos disponga que éstos se realicen mediante el uso de medios electrónicos. También se contempla que los documentos que presenten los particulares o expidan los entes públicos por medios electrónicos que contengan la firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos que los documentos firmados de manera autógrafa. Asimismo, que la autenticidad de la firma electrónica avanzada deberá ser verificada por la autoridad certificadora.

El Capítulo Tercero, establece que los mensajes de datos que lleven asociada una firma electrónica avanzada, también llamados documentos digitales, tendrán el mismo valor jurídico y la misma eficacia probatoria que los documentos escritos en soporte de papel y con firma autógrafa. La reproducción que en formato impreso se haga del mensaje de datos que contenga una firma electrónica avanzada, tendrá valor probatorio pleno cuando se ha conservado en su integridad la información contenida en el mismo a partir de que se generó por primera vez y no sea impugnada su autenticidad o su exactitud. Por otra parte, se prevén los aspectos que la autoridad certificadora deberá considerar para comprobar la autenticidad de un documento firmado electrónicamente, en el caso de que éste sea impugnado. Asimismo, se establecen las condiciones que deben cumplirse para que un mensaje de datos se conserve en su forma original o conste por escrito, accesible, conservado o archivado; además, se señala que a los mensajes de datos que lleven

asociada una firma electrónica le serán aplicables las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia de protección de datos personales.

En el Capítulo Cuarto, se establece que el mensaje de datos se considera enviado o recibido, cuando así lo haga constar el acuse de recibo electrónico generado por el sistema de información utilizado por el destinatario. También, se prevé la presunción de que un mensaje de datos proviene de una persona determinada cuando contenga su firma electrónica avanzada creada en los términos de la ley. Además, se contempla en la Iniciativa los lugares que habrán de considerarse como domicilio de emisión y recepción de los mensajes de datos de los entes públicos y los particulares.

El Capítulo Quinto, establece las características que habrá de reunir una firma electrónica avanzada para que tenga todos los efectos jurídicos que le otorga dicho ordenamiento jurídico.

Dentro de las disposiciones del Capítulo Sexto se consagra el procedimiento para la obtención de un certificado de firma electrónica avanzada. Señalando que los certificados de firma electrónica avanzada surtirán efectos jurídicos cuando estén firmados electrónicamente por la autoridad certificadora.

Se contemplan los elementos que deben contener los certificados de firma electrónica avanzada que expida la autoridad. Se indican los supuestos que producirán la extinción de los certificados de firma electrónica avanzada. Prevé la posibilidad de homologación de los certificados de firma electrónica avanzada expedidos fuera del Estado, los cuales producirán los mismos efectos que los certificados expedidos por las autoridades certificadoras locales, siempre y cuando presenten un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados en la Ley en estudio. Igualmente, se establece un procedimiento sencillo para la renovación de los certificados de firma electrónica avanzada.

El Capítulo Séptimo, desarrolla la posibilidad de la suspensión de un certificado de firma electrónica avanzada. Los titulares de dichos certificados pueden solicitar la suspensión cuando tengan sospecha de la utilización por un tercero no autorizado de su clave privada o contraseña de ésta utilizada en la firma electrónica avanzada, o bien, cuando tal solicitud se haga para modificar alguno de los datos contenidos en el certificado de firma electrónica avanzada. El efecto de la suspensión será dejar de reconocer la autenticidad de la firma electrónica avanzada y durará el tiempo necesario para verificar si se está haciendo o no un uso no autorizado de la firma electrónica avanzada o para actualizar los datos contenidos en el certificado. Se prevé que en el caso de que la autoridad certificadora advierta que efectivamente se está haciendo un uso no autorizado de la firma electrónica, procederá a extinguir el certificado respectivo y a expedir uno nuevo.

El Capítulo Octavo establece las causas por las cuales la autoridad certificadora podrá revocar los certificados de firma electrónica avanzada expedidos, así como el procedimiento que deberá seguirse por la autoridad para determinar la revocación de aquellos. Las causas de revocación son las siguientes: cuando se adviertan inexactitudes en los datos aportados por el firmante para la obtención del certificado de firma electrónica avanzada y por haberse comprobado que al momento de expedición del certificado de firma electrónica avanzada no se cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley.

El Capítulo Noveno contempla las atribuciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, corresponderán a las autoridades registradoras y certificadoras. Las registradoras tendrán a su cargo comprobar por los medios idóneos autorizados por las leyes la identidad personal del solicitante para emitir el certificado de firma electrónica avanzada; recibir y dar trámite ante la autoridad certificadora a las solicitudes de expedición de certificados de firma electrónica avanzada y, una vez expedidos, hacer la entrega de los mismos a los interesados; y señalar al titular del certificado de firma electrónica la forma en que habrá de reservarse los datos de creación de la firma, características y condiciones precisas de utilización del certificado y el procedimiento para comunicar a la autoridad certificadora la pérdida o indebida utilización de sus datos. A las autoridades certificadoras les corresponderá, entre otras, las atribuciones de expedir los certificados de firma electrónica avanzada y prestar los servicios relacionados a la misma; llevar un registro de certificados de firma electrónica en su base de datos; guardar confidencialidad respecto a la información que haya recibido por la prestación del servicio de certificación y

adoptar las medidas necesarias para evitar la falsificación de certificados, así como mantener mecanismos que garanticen la fiabilidad de la firma electrónica avanzada. Asimismo, se otorga facultad a las autoridades certificadoras para que celebren convenios con otras autoridades certificadoras con el fin de que éstas asuman las funciones de aquéllas para otorgar los servicios de certificación de firma electrónica avanzada y demás relacionados con la misma.

Por último, en el Capítulo Décimo se establecen las condiciones mínimas de uso de la firma electrónica avanzada que los sujetos públicos obligados en los términos de dicha Ley deberán establecer y desarrollar en los reglamentos respectivos. Asimismo, se prevén las obligaciones que tendrá el titular de un certificado de firma electrónica avanzada en el uso del mismo, que son, entre otras, las siguientes: actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma electrónica avanzada y dar aviso inmediato a los interesados cuando exista el riesgo de que su firma electrónica sea controlada por terceros no autorizados y pueda ser utilizada indebidamente, así como solicitar oportunamente la suspensión del certificado, en su caso. Por otra parte, se contemplan como derechos de los titulares de los certificados de firma electrónica avanzada los siguientes: ser informados por la autoridades registradoras sobre las características, condiciones y límites de utilización del certificado, así como sobre las características generales de los procedimientos de certificación, verificación y creación de la firma electrónica avanzada; a la confidencialidad sobre la información que proporcione a la autoridad registradora o certificadora, entre otros derechos.

En las apuntadas condiciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, de la Constitución Política Local y 35, del Decreto que Reglamenta el Funcionamiento y Gobierno Interior de esta Cámara Legislativa, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

NUMERO 250

**EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE**

**LEY
SOBRE EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
PARA EL ESTADO DE SONORA**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general en el Estado de Sonora, y tiene por objeto regular:

I.- La aplicación del uso de medios electrónicos y la firma electrónica avanzada en los actos, procedimientos administrativos y servicios que se lleven a cabo entre las dependencias, entidades, unidades administrativas o cualquier otro órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los ayuntamientos, así como entre éstos y los particulares; y

II.- La certificación de la firma electrónica avanzada y los servicios relacionados con la misma.

ARTÍCULO 2°.- Serán sujetos de la presente Ley:

I.- El Poder Ejecutivo, comprendiendo la administración pública centralizada y paraestatal;

II.- El Poder Legislativo;

III.- El Poder Judicial;

IV.- Los organismos constitucional o legalmente autónomos;

V.- Los ayuntamientos, comprendiendo la administración pública centralizada y paramunicipal; y

VI.- Los particulares.

ARTÍCULO 3°.- En todos los actos materia de la aplicación de esta Ley señalados en el artículo 1°, podrá emplearse la firma electrónica avanzada contenida en un mensaje de datos, mediante el uso de medios electrónicos en los términos previstos en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 4°.- En la interpretación y aplicación de esta Ley deberán tomarse en cuenta los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, autenticidad, conservación, confidencialidad e integridad.

ARTÍCULO 5°.- Quedan exceptuados de la aplicación de esta Ley:

I.- Los actos para los cuales cualquier disposición jurídica requiera la firma autógrafa;

II.- Aquellos actos en los cuales una disposición jurídica exija una formalidad que no sea susceptible de cumplirse mediante firma electrónica avanzada; y

III.- Los procedimientos seguidos ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o ante autoridades distintas a las anteriores pero en forma de juicio.

ARTÍCULO 6°.- Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, deberá entenderse por:

I.- Autenticación: Proceso en virtud del cual se constata que un firmante es quien dice ser y que tal situación es demostrable ante terceros;

II.- Autenticidad: Proceso mediante el cual se comprueba si un mensaje de datos fue enviado por el firmante o no y, por lo tanto, es útil para determinar si le es atribuible su contenido y las consecuencias jurídicas que del mismo se derivan;

III.- Autoridad certificadora: Es la dependencia, unidad administrativa u órgano designado por cada ente público sujeto a esta Ley, que tiene a su cargo el servicio de certificación de firmas electrónicas, que vincula al firmante con el uso de su firma electrónica avanzada en las operaciones que realice, administra la parte tecnológica del procedimiento y ejerce el proceso de autenticidad;

IV.- Autoridad registradora: Son las dependencias, unidades administrativas u órganos designados de cada ente público sujeto a esta Ley, que tramita las solicitudes de expedición de certificados de firma electrónica avanzada ante la autoridad certificadora, administra la parte documental del procedimiento y ejerce la verificación de la firma electrónica;

V.- Certificado de firma electrónica avanzada: El documento firmado electrónicamente por la autoridad certificadora, mediante el cual se confirma el vínculo existente entre el firmante y la firma electrónica avanzada;

V Bis.- Comisión Intergubernamental.- La Comisión Intergubernamental para el Desarrollo del Gobierno Electrónico;

VI.- Confidencialidad: Característica de los mensajes electrónicos transmitidos con certificados de firma electrónica avanzada, que garantiza al firmante o al destinatario que la información enviada o recibida electrónicamente permanece íntegra y sin modificaciones y es protegida de su acceso y distribución no autorizada;

VII.- Conservación: Característica de los mensajes de datos en virtud de la cual poseen una existencia permanente y son susceptibles de reproducción;

VIII.- Contraseña: Serie de caracteres generada por el usuario, que lo identifican y que junto con la clave de acceso sirve para acceder a los sistemas electrónicos;

IX.- Datos de creación de firma electrónica avanzada o clave privada: Los datos únicos que con cualquier tecnología el firmante genera para crear su firma electrónica avanzada, y establecer así la relación entre la firma electrónica avanzada y su autor;

X.- Datos de verificación de firma electrónica avanzada o clave pública: Los datos únicos que con cualquier tecnología se utilizan para verificar la firma electrónica avanzada;

XI.- Destinatario: La persona designada por el firmante para recibir el mensaje de datos;

XII.- Equivalencia funcional: La equiparación de la firma electrónica con la firma autógrafa y de un mensaje de datos con los documentos escritos;

XIII.- Fecha electrónica: El conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es enviado por el firmante o recibido por el destinatario;

XIV.- Firma electrónica avanzada: El conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de datos o adjuntos al mismo, que es utilizado como medio para identificar a su autor o firmante, la cual ha sido creada utilizando medios que el titular de la firma mantiene bajo su exclusivo control;

XV.- Firmante: La persona que posee los datos de creación de firma electrónica avanzada y que actúa en nombre propio o en el de una persona a la que representa;

XVI.- Integridad: Es cuando el contenido de un mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado, con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene, como resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación;

XVII.- Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de cualquier tecnología electrónica;

XVIII.- Mensaje de datos o documento digital: La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos y, en general, cualquier documento que se encuentre en soporte electrónico y firmado electrónicamente; y

XIX.- Sistema de información: Todo sistema o programa en el que se realice captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de información, datos o documentos electrónicos.

ARTÍCULO 7º.- Con el propósito de que exista uniformidad y compatibilidad en el uso de las tecnologías de medios electrónicos y firmas electrónicas que refiere esta Ley, los entes públicos sujetos a este ordenamiento podrán coordinarse para acordar y definir los estándares, características y requerimientos tecnológicos que serán aplicables para que los certificados de firma electrónica avanzada sean reconocidos y tengan validez en los términos de esta Ley. De igual forma, podrán coordinarse para

asumir las atribuciones que a cada una de ellas corresponde con el objeto de dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 7 Bis.- Se crea la Comisión Intergubernamental la cual se integrará por los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal Directa de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y un representante de los Poderes legislativo y Judicial, respectivamente y en la que deberán contar como invitados permanentes a los titulares de la Comisión de Mejora Regulatoria, la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, la Procuraduría Fiscal del Estado, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, un representante de los Ayuntamientos de los municipios con población mayor a los 100 mil habitantes y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Sonora y buscará en todo momento que se garantice la participación de todas y cada una de las dependencias que tengan una relación directa con el tema, por conducto de sus respectivos titulares y que tendrá como facultades y obligaciones, entre otras, las siguientes:

I.- Emitir el programa general de trabajo en el que se contendrán las actividades y plazo para que la primera etapa del “Gobierno sin Papel”, entre el Poder Legislativo y los Ayuntamientos sea operacional, así como los plazos y actividades para que éste sea operacional para todos los entes públicos sujetos a la ley, mismo que deberá publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado;

II.- Conocer las necesidades en materia de Tecnologías de la Información Comunicaciones en la Administración Pública Estatal y recomendar las acciones para su desarrollo;

III.- En su caso, apoyar los acuerdos orientados a la búsqueda de recursos económicos para el desarrollo de los proyectos, con los Entes Públicos, así como con organismos nacionales e internacionales ya sean públicos o privados;

IV.- Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración con los poderes federales; la Fiscalía General de la República; los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, a fin de propiciar el intercambio de información y experiencias, el análisis de problemáticas comunes y la realización de proyectos conjuntos en materia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

V.- Proponer el establecimiento de una arquitectura tecnológica para los Entes Públicos, con una visión orientada a la administración estratégica de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para definir y alinear los procesos de los entes de gobierno, mediante la utilización de modelos de operación que permitan identificar las oportunidades para replicar o reutilizar los recursos, mejorar la efectividad y obtener ahorros en los costos al mejorar los servicios proporcionados al ciudadano; en la medida en que las capacidades técnicas, organizacionales y presupuestarias de cada institución lo permitan;

VI.- Promover el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad que permitan el aprovechamiento de las infraestructuras tecnológicas y de los procesos horizontales a través de la administración pública estatal;

VII.- Promover en los Entes Públicos los mecanismos para facilitar la implementación, operación y la homologación de los procedimientos y tecnología de la Firma Electrónica Avanzada;

VIII.- Promover entre los Entes Públicos, los mecanismos para la aplicación de los criterios de interoperabilidad y los lineamientos para la estandarización de los sistemas automatizados de control de gestión y su comunicación a través del uso de medios electrónicos;

IX.- Dictar las medidas para la implementación de acciones que conlleven a la reutilización y reciclaje, según sea el caso, del papel utilizado en los entes públicos;

X.- Establecer el marco normativo que sea indispensable para su operación; y

XI.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO II

DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

ARTÍCULO 8º.- En los actos regulados por esta Ley, los Entes Públicos a que se refieren las fracciones I a V del artículo 2º de la presente Ley, deberán privilegiar el uso de los medios electrónicos utilizando mensajes de datos del servidor público competente. Los particulares podrán hacer uso de medios electrónicos a que se refiere esta Ley, en cuyo caso quedarán sujetos a las disposiciones de la misma.

Los particulares podrán hacer uso de medios electrónicos a que se refiere esta Ley, en cuyo caso quedarán sujetos a las disposiciones de la misma.

ARTÍCULO 9.- La utilización de los medios electrónicos no podrá implicar la existencia de restricciones de cualquier naturaleza en el acceso de los particulares a la prestación de servicios públicos o a cualquier trámite, sea de autoridad estatal o municipal.

ARTÍCULO 10.- Los entes públicos sujetos a esta Ley que presten servicios relacionados con la firma electrónica avanzada, en las solicitudes y documentos que presenten las autoridades y los particulares para llevar a cabo alguno de los actos previstos por esta Ley, deberán verificar la autenticidad de la firma electrónica avanzada, la vigencia del certificado de firma electrónica avanzada y, en su caso, la fecha electrónica.

ARTÍCULO 11.- El contenido de los mensajes de datos relativos a los actos regulados por esta Ley, deberá conservarse en archivos electrónicos, debiéndose hacer constar íntegramente en forma impresa, integrando expediente, únicamente cuando así lo soliciten expresamente los interesados, lo determine la autoridad competente o lo contemple una disposición legal; en caso contrario, se conservarán únicamente en archivos electrónicos.

ARTÍCULO 12.- Los documentos presentados por los particulares por medios electrónicos que contengan la firma electrónica avanzada producirán, en términos de esta Ley, los mismos efectos que los documentos firmados de manera autógrafa.

Igualmente, tendrán los mismos efectos, en términos del párrafo anterior, los documentos digitales que expidan los entes públicos sujetos a esta Ley que contengan la firma electrónica avanzada, cuando reúnan los requisitos previstos en este ordenamiento.

ARTÍCULO 13.- Cuando para determinados actos o negocios jurídicos las leyes exijan el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en esta Ley, siempre y cuando no se contravengan otros ordenamientos legales.

ARTÍCULO 14.- Cuando se realicen cualquiera de los actos regulados por esta Ley a través de un mensaje de datos en hora o día inhábil, se tendrán por realizados en la primera hora hábil del siguiente día hábil.

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior se tendrán por no presentados cuando no contengan la firma electrónica avanzada.

CAPÍTULO III

DE LOS MENSAJES DE DATOS

ARTÍCULO 15.- Los mensajes de datos tendrán el mismo valor jurídico y la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos en soporte de papel y con firma autógrafa.

La reproducción en formato impreso del mensaje de datos tendrá valor probatorio pleno cuando se ha conservado en su integridad la información contenida en el mismo a partir de que se generó por primera vez en su forma definitiva como tal, y no sea impugnada la autenticidad o exactitud del mensaje y de la firma electrónica.

ARTÍCULO 16.- De impugnarse la autenticidad o exactitud de un mensaje de datos o de la propia firma electrónica avanzada, se procederá a su comprobación o verificación ante la autoridad certificadora, para lo cual se verificará:

I.- La confiabilidad del programa en que hayan sido generados, archivados o conservados; y

II.- La garantía de confidencialidad, autenticidad, conservación e integridad de la información generada que ofrezca el sistema.

ARTÍCULO 17.- Cuando las leyes requieran que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos:

I.- Si existe certeza en los términos de esta Ley, de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos; y

II.- De requerirse que la información sea presentada en su forma original, si dicha información puede ser mostrada a la persona que se deba presentar.

ARTÍCULO 18.- Si la Ley exige que determinada información o documento conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con la emisión de un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta.

Asimismo, si la Ley exige que ciertos actos jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos en un mensaje de datos siempre que se observen las condiciones siguientes:

I.- Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente;

II.- Que conserven el formato en que se generó, recibió y archivó o en algún formato que permita reproducir con exactitud la información generada o recibida; y

III.- Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje de datos, la fecha, la hora y lugar en que fue enviado o recibido.

ARTÍCULO 19.- A los mensajes de datos les serán aplicables las disposiciones constitucionales y legales en materia de protección de datos personales.

CAPÍTULO IV

DE LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS

ARTÍCULO 20.- Para que un mensaje de datos se considere enviado y recibido se requiere de un acuse de recibo electrónico, entendiéndose como tal, el generado por el sistema de información utilizado por el destinatario.

ARTÍCULO 21.- El momento de recepción de un documento firmado electrónicamente se determinará cuando ingrese al sistema de información del destinatario. Cuando el firmante reciba acuse de recibo del destinatario, se entenderá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente.

ARTÍCULO 22.- Se entiende que un mensaje de datos proviene de una persona determinada cuando contenga su firma electrónica avanzada creada en los términos de esta Ley y, por lo tanto, el destinatario podrá actuar en consecuencia, salvo que haya sido informado por escrito y en papel por el firmante de que el mensaje de datos no provenía de éste.

ARTÍCULO 23.- Salvo pacto en contrario entre el firmante y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el firmante tenga su domicilio principal, establecimiento u oficina pública y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo.

ARTÍCULO 24.- Cada mensaje de datos recibido se tendrá por un mensaje de datos diferente.

CAPÍTULO V DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

ARTÍCULO 25.- Las disposiciones del presente ordenamiento serán aplicables de modo que no excluyan, restrinjan o priven a cualquier método de creación de firmas electrónicas avanzadas.

ARTÍCULO 26.- La firma electrónica avanzada se considerará como tal, si tiene al menos las siguientes características:

- I.- Que indique que se expide como tal;
- II.- Cuento con un certificado de firma electrónica avanzada vigente;
- III.- Que contenga el código único de identificación del certificado;
- IV.- Identifique a la autoridad certificadora que emite el certificado, incluyendo la firma electrónica avanzada de ésta;
- V.- Que permita determinar la fecha electrónica del mensaje de datos;
- VI.- Que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante;
- VII.- Los datos de creación de la firma estén en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante, y
- VIII.- Sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica avanzada realizada después del momento de la firma.

ARTÍCULO 27.- La firma electrónica avanzada que permita vincular al firmante con el mensaje de datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez jurídica y eficacia probatoria que las leyes otorgan a la firma autógrafa.

La firma electrónica avanzada, además de tener las características mencionadas en el artículo anterior, deberá garantizar cuando menos lo siguiente:

I.- Que los datos utilizados para su generación se puedan producir sólo una vez, de tal forma que se asegure razonablemente su confidencialidad;

II.- La seguridad suficiente y razonable de no ser alterada con la tecnología existente; y

III.- La integridad del mensaje de datos.

CAPÍTULO VI **DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

ARTÍCULO 28.- Para la obtención de un certificado de firma electrónica avanzada se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:

I.- Los solicitantes deberán presentar ante la autoridad registradora la solicitud para la obtención de certificado de firma electrónica avanzada debidamente requisitada y autorizada por el titular de la dependencia, unidad administrativa u órgano en que se tramite;

II.- Recibida la solicitud, la autoridad registradora deberá verificar la identidad del firmante con base en los documentos oficiales de identificación que ésta le requiera, así como el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el Reglamento;

III.- La autoridad registradora enviará la solicitud de certificado a la autoridad certificadora;

IV.- Recibida la solicitud y los demás documentos, la autoridad certificadora expedirá el certificado de firma electrónica avanzada cuando se cumplan los requisitos necesarios, registrará el certificado en su base de datos de firmas electrónicas y enviará a la autoridad registradora el certificado con su firma electrónica avanzada, así como los documentos que la autoridad registradora le hubiere remitido a ésta;

V.- Una vez que la autoridad registradora reciba el certificado de la autoridad certificadora, procederá a registrarlo y enviarlo para su entrega al firmante; asimismo, administrará y resguardará la documentación proporcionada por el solicitante; y

VI.- El solicitante una vez que obtenga el certificado de firma electrónica deberá resguardar su firma electrónica avanzada en un medio electrónico.

ARTÍCULO 29.- Los certificados de firma electrónica avanzada tendrán valor probatorio en los términos de esta Ley y surtirán efectos jurídicos cuando estén firmados electrónicamente por la autoridad certificadora.

ARTÍCULO 30.- Los efectos del certificado de firma electrónica avanzada son:

I.- Autenticar que la firma electrónica avanzada pertenece a determinada persona;

II.- Identificar la fecha electrónica; y

III.- Verificar la vigencia de la misma.

ARTÍCULO 31.- Los certificados de firma electrónica avanzada deberán contener:

I.- La expresión de que tienen esa naturaleza;

II.- El código único de identificación;

III.- La firma electrónica avanzada de la autoridad certificadora que lo expide;

IV.- La identificación del firmante, en el supuesto de personas físicas, el nombre y apellidos o razón social del firmante. Se podrá consignar en el certificado de firma electrónica avanzada cualquier otra circunstancia personal del titular, siempre que aquél otorgue su consentimiento. En el supuesto de entes públicos se incluirá la denominación oficial y el nombre del titular de la firma;

V.- Los datos de verificación de firma electrónica avanzada que corresponden a los datos de creación de firma que se encuentran bajo el control del firmante;

VI.- El período de vigencia del certificado de firma electrónica avanzada;

VII.- En su caso, los límites de uso del certificado de firma electrónica avanzada; y

VIII.- La referencia de los programas de cómputo empleados para la creación de la firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 32.- Los certificados de firma electrónica avanzada se extinguirán:

I.- Por expiración de su vigencia;

II.- Cuando lo solicite el firmante;

III.- Por fallecimiento del firmante o su representante, incapacidad superveniente total de cualquiera de ellos, terminación de la representación o disolución de la persona moral representada;

IV.- Cuando un servidor público firmante deje de prestar sus servicios en el ente público correspondiente; y

V.- Por revocación en los casos establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 33.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 32, fracción IV, el superior jerárquico del servidor público que deje de prestar sus servicios comunicará inmediatamente dicha circunstancia a la autoridad registradora y ésta a su vez a la autoridad certificadora para efectos de la extinción del certificado de firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 34.- Los certificados de firma electrónica iniciarán su vigencia en el momento mismo de su emisión y expirarán el día y hora en ellos expresados, considerando para tales efectos el tiempo universal coordinado.

Las autoridades certificadoras deberán publicar en las páginas de internet del ente público correspondiente la situación jurídica de los certificados de firma electrónica para el efecto de que cualquier persona pueda conocer la vigencia de los mismos.

ARTÍCULO 35.- Todo certificado de firma electrónica avanzada expedido autoridad distinta a las que esta Ley les otorga competencia para ello, deberá ser homologado ante la autoridad certificadora para que produzca los mismos efectos jurídicos que un certificado de firma electrónica avanzada expedido conforme a esta Ley.

ARTÍCULO 36.- La autoridad certificadora podrá renovar los certificados de firma electrónica avanzada. Para ello, los solicitantes deberán presentar, con 30 días de anticipación a la fecha de expiración, ante la autoridad registradora la solicitud de renovación de certificado de firma electrónica avanzada debidamente requisitada y autorizada por el titular de la dependencia, unidad administrativa u

órgano que se tramite y, de considerarlo necesario, dicha autoridad podrá solicitar nuevamente la acreditación de los elementos de identificación personal del solicitante.

CAPÍTULO VII

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 37.- Un certificado de firma electrónica avanzada puede ser suspendido a solicitud expresa de su titular o del servidor público facultado de la entidad que corresponda, si para ello concurren algunas de las siguientes circunstancias:

I.- La sospecha de utilización de la clave privada, contraseña o de la propia firma electrónica avanzada por parte de un tercero no autorizado; y

II.- Que el firmante solicite la modificación y se efectúe la misma respecto de alguno de los datos contenidos en el certificado de firma electrónica avanzada.

De igual forma, puede suspenderse el certificado cuando la autoridad certificadora lo estime conveniente dentro de la tramitación de un procedimiento de revocación de uno o más certificados.

ARTÍCULO 38.- El efecto inmediato de la suspensión de un certificado de firma electrónica avanzada es que la autoridad certificadora deja de certificar la autenticidad de la firma electrónica avanzada.

La duración de la suspensión será por el tiempo necesario para verificar si se está haciendo o no, un uso no autorizado de la firma electrónica avanzada o actualizar los datos del registro o la duración del procedimiento de revocación, según sea el caso.

Si la autoridad certificadora advierte que se realiza un uso no autorizado de la firma electrónica avanzada procederá a extinguir el certificado y a expedir uno nuevo; cuando se hubiesen actualizado los datos de registro se dejará sin efecto la suspensión procediéndose a activarlo.

CAPÍTULO VIII

DE LA REVOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 39.- Los certificados de firma electrónica avanzada podrán ser revocados por la autoridad certificadora cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

I.- Cuando se adviertan inexactitudes en los datos aportados por el firmante para la obtención del certificado de firma electrónica avanzada; y

II.- Por haberse comprobado que al momento de su expedición el certificado de firma electrónica avanzada no cumplió con los requisitos establecidos en esta Ley, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe.

ARTÍCULO 40.- El procedimiento de revocación se iniciará de oficio por la autoridad certificadora o a instancia de parte interesada, el cual deberá notificarse en forma personal al interesado, a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas que tuviere.

ARTÍCULO 41.- Dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo anterior, la autoridad certificadora emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá notificarse personalmente a los interesados.

ARTÍCULO 42.- Los titulares de certificados de firma electrónica avanzada que incurran en causas de revocación, no podrán solicitar certificado de firma electrónica sino transcurrido un año, contado a partir de que haya quedado firme la resolución de revocación dictada por la autoridad.

CAPÍTULO IX

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES REGISTRADORAS Y CERTIFICADORAS

ARTÍCULO 43.- Los entes públicos sujetos a la presente Ley, en los reglamentos que expidan en el ámbito de su respectiva competencia, designarán a la dependencia, unidad administrativa u órgano que ejercerá las atribuciones de autoridades certificadoras y de autoridades registradoras, en los términos de este ordenamiento.

ARTÍCULO 44.- Las autoridades registradoras tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Comprobar por los medios idóneos autorizados por las leyes, la identidad y cualesquier circunstancia personal relevante de los solicitantes para la emisión de certificados de firma electrónica avanzada;

II.- Requerir a los titulares de los certificados de firma electrónica avanzada la información necesaria para el ejercicio de sus funciones;

III.- Recibir y dar trámite ante la autoridad certificadora, a las solicitudes de expedición de certificados de firma electrónica avanzada y una vez obtenido, hacer la entrega del mismo al firmante;

IV.- Señalar al firmante la forma en que habrá de reservarse los datos de creación de la firma, características y las condiciones precisas de utilización del certificado, el costo por la expedición del mismo, en su caso, así como el procedimiento para comunicar a la autoridad certificadora la pérdida o indebida utilización de la firma electrónica o sus datos;

V.- Conservar registrada toda la información y documentación relativa a un certificado de firma electrónica avanzada por el tiempo que establezcan las disposiciones aplicables; y

VI.- Las demás que le otorgue esta Ley.

ARTÍCULO 45.- Las autoridades certificadoras tendrán las atribuciones siguientes:

I.- Expedir certificados de firma electrónica avanzada y prestar servicios relacionados con la misma;

II.- Llevar el registro de certificados de firma electrónica avanzada en su base de datos;

III.- Celebrar los convenios necesarios con las demás autoridades certificadoras de los ámbitos municipales, estatal o federal, así como con prestadores de servicios de firma electrónica a efecto de establecer los estándares tecnológicos y operativos referentes a la firma electrónica avanzada y servicios relacionados a la misma;

IV.- Colaborar con las diversas autoridades certificadoras municipales, estatales, federales o los particulares prestadores de servicios de certificación de firmas, con el fin de desarrollar sistemas informáticos internos y externos que optimicen la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada;

V.- Publicar de inmediato en el registro la fecha y la hora en las que se expidió, se dejó sin efecto o revocó un certificado de firma electrónica avanzada;

VI.- Guardar confidencialidad respecto de la información que hayan recibido para la prestación del servicio de certificación;

VII.- No almacenar ni copiar los datos de creación de firma electrónica avanzada de la persona a la que hayan prestado sus servicios;

VIII.- Adoptar las medidas necesarias para evitar la falsificación de certificados;

IX.- Mantener mecanismos que garanticen la confiabilidad de la firma electrónica avanzada;

X.- Suspender la vigencia de los certificados de firma electrónica avanzada en los casos previstos por esta Ley;

XI.- Revocar los certificados de firma electrónica avanzada cuando se actualice alguno de los casos previstos por esta Ley;

XII.- Garantizar la autenticidad, integridad, conservación confidencialidad y confiabilidad de los mensajes de datos y de la firma electrónica avanzada;

XIII.- Homologar los certificados de firma electrónica avanzada expedidos por otras entidades públicas municipales, estatales, federales o personas prestadoras de servicios de certificación de firma electrónica; y

XIV.- Las demás que le confiere esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 46.- Las autoridades certificadoras podrán prestar el servicio de consignación de fecha electrónica de los mensajes de datos y los demás servicios que se señalen en los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 47.- Las autoridades certificadoras de los entes públicos sujetos a esta Ley, podrán celebrar convenios entre sí, con el propósito de establecer y unificar los requisitos jurídicos y técnicos necesarios para la expedición y, en su caso, homologación de certificados de firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 48.- Las autoridades designadas como certificadoras podrán celebrar convenios con otras autoridades certificadoras en el Estado, con el fin de que éstas asuman las funciones de aquéllas relativas a la expedición de los certificados de firma electrónica avanzada y a la prestación de servicios relacionados con la misma.

CAPÍTULO X

CONDICIONES DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

ARTÍCULO 49.- Las condiciones del uso de la firma electrónica avanzada que las autoridades certificadoras emitan en sus respectivos reglamentos, deberán al menos establecer lo siguiente:

I.- Que el firmante reconozca como propia y auténtica la información firmada electrónicamente que por medios remotos de comunicación electrónica envíe interna o externamente;

II.- Que el firmante acepte que el uso de su certificado de firma electrónica avanzada por persona distinta, quedará bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que de ocurrir este supuesto, admitirá la autoría de la información que se envíe a través de medios remotos de comunicación electrónica que contenga su firma electrónica avanzada; y

III.- Que el firmante asuma la responsabilidad derivada del uso de su firma electrónica avanzada, notificando oportunamente al ente público de su adscripción, para efectos de su invalidación, la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de su certificado de firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 50.- El firmante tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma electrónica avanzada, así como evitar el uso no autorizado de la misma;

II.- Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia o que hayan sido consignadas en el mismo, son exactas;

III.- Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica avanzada o no hubiere actuado con la debida diligencia; y

IV.- Dar aviso inmediato a los interesados cuando exista riesgo de que su firma electrónica avanzada sea controlada por terceros no autorizados y pueda ser utilizada indebidamente y solicitar oportunamente la suspensión o extinción del certificado, en su caso.

ARTÍCULO 51.- El firmante tendrá los siguientes derechos:

I.- A ser informados por la autoridad registradora sobre:

a).- Las características y condiciones precisas para la utilización del certificado, así como los límites de uso y, en su caso, el costo por la expedición del certificado de firma electrónica avanzada;

b).- Las características generales de los procedimientos de certificación, verificación y creación de la firma electrónica avanzada; y

c).- La cancelación de su inscripción en el registro de la autoridad certificadora;

II.- A la confidencialidad de la información proporcionada a la autoridad registradora y certificadora;

III.- A solicitar la modificación de datos y elementos de la firma cuando así convenga a sus intereses;

y

IV.- Que se le brinde constancia del certificado de firma electrónica avanzada.

CAPÍTULO XI RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 52.- Los servidores públicos y particulares que le dieran un uso indebido, utilicen o se sirvan de un certificado de firma electrónica avanzada o de una firma electrónica avanzada como medio para cometer actos, hechos u omisiones que constituyan algún tipo de responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, del Código Penal para el Estado de Sonora o cualquier otro ordenamiento legal, les serán aplicables las sanciones y penalidades que se establezcan con motivo de la conducta ilícita que se produzca o actualice utilizando como medio el certificado de firma electrónica avanzada o la firma electrónica avanzada, en términos de la presente Ley.

ARTÍCULO 53.- Comete el delito de apropiación de certificado de firma electrónica avanzada y sustitución de identidad y le será aplicable una pena de tres a ocho años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días de multa, a toda persona que indebidamente obtenga, reproduzca, se apodere, administre, utilice, destine para cualquier fin o le de un uso indebido a un certificado de firma electrónica avanzada o una firma electrónica avanzada, sin que medie el consentimiento o autorización expresa de su legítimo titular o de quien se encuentre facultado para expedirlas.

Las penas a que se refiere el presente artículo serán impuestas sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que se actualicen por los hechos que se cometan utilizando como medio un

certificado de firma electrónica avanzada o una firma electrónica avanzada, cuyas sanciones serán acumulativas para efectos de su cómputo.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir los reglamentos de esta Ley dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la misma, en los que se establecerán la forma, modalidades y condiciones para la expedición de certificados de firma electrónica avanzada y uso de la firma electrónica avanzada en la presentación y realización de solicitudes, promociones, trámites y actos que se realicen en términos de esta Ley; asimismo, establecerán los estándares tecnológicos y los lineamientos generales de operación que se requiera para dar cumplimiento al objeto de este ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Los entes públicos deberán, en el término a que se refiere el artículo primero transitorio, obtener los medios tecnológicos necesarios para ofrecer la infraestructura y servicios correspondientes al uso de la firma electrónica avanzada.

T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 2 1 2

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A más tardar el 01 de enero de 2019, la Comisión Intergubernamental deberá publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, las obligaciones a las que se hacen referencia en las fracciones I, IX y X del artículo 7 Bis del presente Decreto.

A P E N D I C E

LEY 250; B. O. No. 2 sección II, de fecha 6 de julio de 2006.

Decreto No. 212; B. O. No. 42, sección III, de fecha 22 de noviembre de 2018, que reforma el artículo 8 y se adiciona una fracción V Bis al artículo 6 y un artículo 7 Bis.

I N D I C E

LEY SOBRE EL USO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EL ESTADO DE SONORA.....	6
CAPITULO I.....	6
DISPOSICIONES GENERALES.....	6
CAPITULO II.....	8
DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS.....	8
CAPITULO III.....	9
DE LOS MENSAJES DE DATOS.....	9
CAPITULO IV.....	10
DE LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS.....	10

CAPITULO V	11
DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.....	11
CAPITULO VI	11
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.....	11
CAPITULO VII	13
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA.....	13
CAPITULO VIII	14
DE LA REVOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA.....	14
CAPITULO IX	14
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES REGISTRADORAS Y CERTIFICADORAS.....	14
CAPITULO X	16
CONDICIONES DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.....	16
CAPITULO XI	17
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.....	17
TRANSITORIOS	17